

# El Comercio

EDITORIAL

## Jaque a las FARC con fortalecimiento democrático

La impecable operación Jaque, que permitió rescatar a 15 personas que las FARC mantenían secuestradas, marca un punto de inflexión en la dura lucha que libra el pueblo colombiano contra ese grupo terrorista y criminal aliado al narcotráfico que mantiene en vilo a toda una nación.

Se trata de un complejo plan que demandó inteligencia, paciencia, ingentes recursos y sobre todo valentía. ¿Qué hubiera pasado si la operación hacía agua y fracasaba? Y es igualmente destacable que haya sido hecha por un gobierno democrático, sin disparar un solo tiro y sin excesos, con lo que sale fortalecida la institucionalidad, como corresponde.

Por lo mismo, el Gobierno Colombiano y el presidente Álvaro Uribe deben tener cuidado de no contaminar este hito de paz con proyectos políticos personalistas o re-reeleccionistas, como se lo sugieren algunos consejeros. Ya antes del rescate, Colombia atravesaba una dura crisis por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que ponía en duda la legalidad de la reforma constitucional reeleccionista.

Hoy los colombianos, latinoamericanos y el mundo entero

celebramos el rescate de Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados, que eran mantenidos como botín de guerra y mercancía intercambiable para exigir la liberación de cabecillas terroristas y pedir rescates.

Sin embargo, debemos recordar que aún quedan más de 600 personas secuestradas, lo que obliga al Gobierno Colombiano a mantener la política antiterrorista, basada en la firme decisión

**El presidente Uribe y su gobierno democrático deben cuidarse de no contaminar este hito de paz con iniciativas políticas re-reeleccionistas**

de combatir los excesos, pero también en tender puentes para la distensión y la desmovilización de los miembros de las FARC.

El diálogo debe continuar, pero sin descuidar la inteligencia ni la mano fuerte, sobre todo ahora que el grupo terrorista está jaqueado por el rescate de anteayer, la muerte de su cabecilla 'Manuel Marulanda' y de su lugarteniente 'Raúl Reyes' y las tácticas de recompensa a quienes se entregan a las autoridades.

Esta línea de continuidad antiterrorista es la que debe mantenerse y enriquecerse institucionalmente, desde un gobierno democrático y un Estado fuerte, y sin que ella dependa de una sola persona. El equilibrio de poderes y la alternancia en el Gobierno son condiciones básicas de la salud democrática, precisamente para evitar excesos o atomamientos que recuerdan lo más sombrío de las dictaduras.

El presidente Álvaro Uribe, un líder auténtico que supo actuar con tino y firmeza para no caer en el juego del apaciguamiento con un grupo terrorista y criminal que ataca a la democracia, ha logrado ya un lugar privilegiado en la historia de Colombia y de la democracia latinoamericana. Ahora tiene que seguir promoviendo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la paz, concluir su mandato y dar ejemplo claro de desprendimiento y convicción democrática. Como buen estadista, debe promover nuevas figuras políticas y tomar previsiones para entregar la posta a su sucesor, sin forzar riesgosas re-reelecciones. Los peruanos sabemos muy bien los peligros de esa obsesión cuyas nefastas consecuencias aún sufrimos. ■■■

### EL DURO RETO DE ALCANZAR LA CALIDAD EDUCATIVA

## Otra vez el Perú muy rezagado

León Trahtemberg  
Educativo



que están arriba son Cuba, Chile, Costa Rica, México, Uruguay (y Nuevo León). En la media regional se ubican Argentina, Brasil y Colombia. Debajo de la media regional se ubican El Salvador, Perú y otros cinco países a los que superamos ligeramente en los promedios: Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá y luego República Dominicana.

En 1997, el Perú era el número 11 de 12. Ahora es el 10 de 16, pero, con excepción de Paraguay y República Dominicana – supera a cuatro países muy débiles en educación que no participaron la vez pasada: Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Es decir, no hemos avanzado respecto a los que nos superaban en 1997.

Así, en diez años no ha habido mejora. Lo más grave es que dentro de lo precario de nuestro desempeño, el Perú es el país que mayor distancia muestra entre el desempeño

de alumnos en el sector urbano y el rural, lo que quiere decir que si nos focalizáramos solo en los resultados del sector rural seríamos los últimos de América Latina. Eso quiere decir que no se logra inyectar capital cultural a los más pobres para salir de su pobreza, con lo que se sigue alimentando la inequidad.

En el análisis de los factores asociados a los resultados se muestra que el más decisivo es el clima institucional acogedor y estimulante en los colegios, lo que explica entre un 40% y 49% de los resultados, siendo más decisivo aun que el nivel socioeconómico y cultural promedio de las familias. Eso significa que a igualdad de condiciones de vida de los alumnos en un distrito cualquiera, lo que se haga dentro de una escuela puede ser muy superior a lo que se haga en otra, influyendo con ello notoriamente en el mejor desempeño de los alumnos. Esa es una buena noticia porque muestra que las escuelas bien conducidas son más eficaces que las que no lo son (en el Perú esto se ha corroborado con los resultados de Fey Alegría).

No hay ninguna justificación para que el Perú esté tan lejos del desempeño de países que han avanzado más en lo educativo como Cuba, Chile, Costa Rica, México, Uruguay. Mucho menos respecto a países ubicados en la media regional como Argentina, Brasil y Colombia. Superar por unos puntos o décimas a los coleros latinoamericanos que están debajo de la media no es señal de progreso.

Si la educación de calidad con una escolaridad acumulada de al menos doce grados es la escalera para salir de la pobreza, invertir en educación constituye la más poderosa política redistributiva en manos del Estado. La agenda gubernamental aprista debería tener un norte que ya es impostergable: elevar los aprendizajes de los alumnos al nivel de los estándares regionales. ■■■



ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILAR

### EL HABLA CULTA

Por Martha Hildebrandt

**CALLAR.** El verbo *callar* viene del latín popular *callare* 'bajar', especialmente referido a la intensidad de la voz humana. La forma reflexiva *callarse* alterna indistintamente con *callar* (tal como en las parejas *reír* y *reírse*, *caer* y *caerse*, etc.). El derivado prefijal *acallar* significa en la lengua general 'hacer callar'; últimamente, sin embargo, se está extendiendo en el español de América (el Perú incluido) el uso transitivo de *callar* por *acallar* o hacer *callar*.

## rincón del autor

Jaime de Althaus Guarderas



La reforma mantiene el salario mínimo para la microempresa, de modo que solo en Lima Metropolitana el 38% de la población ocupada quedaría excluida

## Los límites de la segunda ola

La semana pasada festejamos esta segunda ola de reformas, plasmada en cerca de cien decretos legislativos, cuyo objetivo es no solo mejorar la competitividad del país y la institucionalidad económica, sino principalmente incluir a las mayorías en el gran movimiento del mercado, allanando las barreras que frustran la acumulación popular e impiden el crecimiento de las empresas de los pobres.

Así, hay un paquete que apunta a reformar el Estado para hacer-

lo eficiente y servicial y reducir los costos de abrir y operar empresas y de exportar. Otro que apunta a facilitar la organización de los pequeños agricultores, para que pongan en valor sus tierras y den el salto a la acumulación capitalista (programa de compensación, asociatividad, comunidades, etc.). Otro para permitir la misma acumulación en las microempresas y pequeñas empresas, reduciendo el costo de la formalidad laboral y tributaria.

Es bueno, sin embargo, señalar los límites que contienen al-

gunas de estas reformas para alcanzar el objetivo buscado. La ley de formalización de las mypes, que es un avance importante porque eleva el tamaño máximo de la pequeña empresa hasta un tope de ventas de casi \$/6 millones y le reduce el costo de la formalidad laboral de un 64% que era antes, con el régimen general, a un 32% – todavía más alto que el régimen general chileno, que es de 29% –, mantiene, sin embargo, el salario mínimo de \$/550 incluso para las microempresas,

“La respuesta del Estado de derecho tiene que ser firme y con las armas de la ley. Estos últimos crímenes obligan al Gobierno a revisar su estrategia antisubversiva, pues los terroristas de las FARC actúan con la escopeta de dos cañones: por un lado simulan avenirse a negociar con el Gobierno, pero por el otro continúan la ola de secuestros y asesinatos, lo que es ya intolerable”. EDITORIAL DEL EL COMERCIO / 7 DE MAYO DEL 2003

### HUMOR PROFANO

Por Molina



### LO TÉCNICO ANTES QUE LO IDEOLÓGICO

## Nuevo enfoque ambiental

Editorial  
“El Mercurio”  
de Chile



Para sorpresa de muchos, la ministra Ana Lya Uriarte anunció que se eliminarían las comisiones regionales de medio ambiente (Corema) en el proyecto de ley que modifica la institucionalidad en esta área. Actualmente, son la instancia regional que aprueba o rechaza los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Serían reemplazadas por nuevos organismos que respondan más centralizadamente al nuevo Ministerio del Medio Ambiente.

La composición actual de las Corema muestra errores de diseño. Las integran los intendentes, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales (seremis) de los ministerios que componen el consejo directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y cuatro consejeros regionales, también elegidos centralmente. Además, dependen del Gobierno Central, a través del intendente.

Su funcionamiento ha sido

muy criticado por todos los sectores, debido a su excesiva politización, su nula capacidad de responder a intereses nacionales o regionales y su proceder poco técnico. Por su composición y atribuciones, conducen a resultados socialmente ineficientes. No disponen de vías para tratar adecuadamente los intereses regionales y locales, que en muchos casos preferirían menos restricciones para aumentar el empleo, y en otros desearían más protección ambiental. Tampoco han sido exitosos en articular el interés suprarregional o nacional, como podría esperarse de su dependencia central.

Pese a la infinidad de críticas, las políticas ambientales chilenas han sido relativamente eficientes: nuestro país ocupa el puesto 26 entre más de 130 naciones analizadas por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) en términos de desempeño ambiental, por sobre Holanda, Bélgica y EE.UU.

Para mejorar la institucionalidad regional, la propuesta gubernamental plantea un sistema centralizado por un nuevo Ministerio del Medio Ambiente, cuyos representantes regionales tendrían

un rol coordinador en ese nivel, y se excluiría a los intendentes, gobernadores y consejeros regionales. Se afirma que esto podría dar más coherencia a sus decisiones y evitaría que consideraciones políticas regionales e interministeriales – a través del consejo directivo – determinen las evaluaciones ambientales de los proyectos. La nueva estructura parecería ir contra las políticas de descentralización, pero también la actual tiene un alto grado de centralización, encubierto en formas regionales.

Hasta donde se advierte, el nuevo proyecto no resuelve el problema de cómo compatibilizar una participación ciudadana regional y local con la reducción del riesgo de captura del sistema regional por grupos de presión ambientalistas o empresas contaminantes. Sin embargo, el esquema actual no brinda una descentralización real, ni tampoco la coherencia que se le supone a la centralización. Cabe, pues, esperar que el debate de esta propuesta atienda con gran cuidado al diseño organizacional, de modo que lo técnico-jurídico prevalezca por sobre lo ideológico-emocional, considerando que las instancias resultantes podrían aplicar sanciones severísimas. ■■■

prios comuneros, que en la práctica son propietarios de sus parcelas pues estas se heredan de padres a hijos. Se les ofrecería formalizar esa realidad. Ese debería ser el programa estrella del Cofopri, pero no se ha previsto. Tampoco se ha adoptado como política de Estado, debido a intereses burocráticos, la implantación del riego por aspersión y otras tecnologías del programa Sierra Productiva. Si hiciéramos ambas cosas – propiedad y tecnología –, produciríamos la revolución inclusiva más importante de la historia del país y sacaríamos de la pobreza a toda la sierra rural en pocos años. Tan sencillo como eso. ■■■